

Sobre la postura del Gobierno Federal y las Inundaciones

POSICIONAMIENTO DEL DIPUTADO JOSE ANTONIO DE LA VEGA ASMITIA, COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES SOBRE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

Con el permiso de la presidencia:

Los tabasqueños padecemos una de las peores tragedias que entidad mexicana alguna haya conocido en los últimos años. Las más terribles inundaciones en la historia de nuestro estado han afectado directamente a más de un millón de personas. El drama que viven diariamente quienes lo han perdido prácticamente todo es desconsolador y los costos del desplazamiento, las pérdidas de bienes muebles e inmuebles, de cultivos, etc. quedan aún imposibles de cuantificar ante la magnitud del desastre.

Es Tabasco quizá la primera víctima mexicana del "calentamiento global", pero sin duda en lo acontecido también ha habido responsabilidades y negligencias que no se pueden ocultar, ni se deben tolerar. Basta ya de seguir tratando de tapar el sol con un dedo y solapar a quienes han puesto en riesgo no sólo el patrimonio de familias enteras, sino la misma integridad física de las personas.

Compartimos la visión de que ante la magnitud de los daños lo primero es atender a todos los damnificados, actuar de inmediato para evitar cualquier brote epidemiológico que sólo profundizaría el sufrimiento y la zozobra; así como brindar seguridad ante el pillaje y la rapiña que desgraciadamente también se han hecho presentes.

Sin embargo, una vez superada la emergencia consideramos necesario, y exigimos, realizar un diagnóstico integral de lo acontecido. Conocer veraz y adecuadamente el antes, durante y después de la contingencia, permitirá dar certidumbre y juzgar en su cabal dimensión tanto la acción

como la responsabilidad de cada quien en los hechos que pusieron en riesgo la seguridad de todo un pueblo.

No dudamos de quienes señalan que la fuerza de la naturaleza es cambiante, que se expresa incontenible de tanto en tanto, que reclama territorios y hasta cobra agravios a su delicado equilibrio, pero sabemos que los estragos causados por esas fuerzas naturales pueden ser menores, y hasta se pueden prevenir, con políticas eficientes y con políticos responsables y comprometidos con la preservación de las vidas y los bienes de sus representados. Evidente, y desafortunadamente, ese no ha sido el caso de Tabasco.

No expreso lo anterior en un afán de buscar o fabricar culpables, tampoco para deslindar o encubrir responsabilidades *a priori*, como en su momento y veladamente lo ha intentado hacer el Titular del Ejecutivo Estatal al sugerir reiteradamente la falta de apoyo de la Federación para la construcción de infraestructura hidráulica en nuestro estado. Nuestro único propósito es que se determinen las verdaderas causas de la tragedia y, de una vez por todas, se tomen las medidas adecuadas para que esto no vuelva a ocurrir.

Resulta muy cómodo recurrir al trillado recurso de echar a los demás las culpas de nuestras desgracias. Puede ser que algo de culpa se encuentre más allá de nuestro ámbito, pero sólo una mínima parte. Si no queremos que nuestros problemas vayan a más, ¿porqué no afrontar la realidad?, ¿porqué, por ejemplo, ocultar que mediante diversas obras para controlar inundaciones y rescatar tierras para su aprovechamiento viviendístico, industrial y agropecuario, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) destinó a Tabasco cerca del 80 por ciento del presupuesto para la protección de centros de población a escala nacional en el último trienio?

Los recursos, comprometidos vía el Proyecto Integral de Control de Inundaciones (PICI), ascendieron a 2 mil 60 millones de pesos, de los cuales casi la tercera parte (72%) fue de origen federal y el resto (28%) estatal.

¿Se puede considerar lo anterior verdaderamente como una falta de apoyo de la Federación? ¿A quien se pretende engañar? o mejor dicho ¿A quién se trata de encubrir?

No olvidemos que el PICI fue presentado por el gobierno de Manuel Andrade como el proyecto más importante e hidráulicamente más complejo que en los últimos veinte años se había hecho, no sólo en Tabasco sino en todo el país.

De acuerdo con el gobierno andradista, el proyecto era parte del Plan Hidráulico del Estado de Tabasco, con el que se pretendía proteger a más de 400 mil habitantes y resguardar más de 25 mil hectáreas de tierras.

En consecuencia, durante los años de gobierno de Manuel Andrade Tabasco recibió más de 4 mil millones de pesos para obras hidráulicas, que de haberse realizado seguramente hubieran evitado muchas de las penas actuales.

El Gobernador del estado ha afirmado que la catástrofe de Nueva Orleans se quedó pequeña al lado de la sucedida en nuestro estado; nadie duda lo contrario. Empero, también hay que recordar que investigaciones posteriores a lo sucedido en Nueva Orleans revelaron malos manejos por parte de funcionarios del ámbito estatal. ¿No será que también en ese sentido podremos encontrar similitudes?

Por lo anterior, la Fracción Parlamentaria de Acción Nacional rechaza que la falta de infraestructura hidráulica en nuestra entidad pueda ser atribuible exclusivamente a una ausencia de voluntad política por parte de la Federación y, al mismo tiempo, demanda al Ejecutivo del Estado que, una vez pasada la situación crítica, se haga una investigación seria y puntual de lo sucedido con los recursos que para ese fin han sido destinados a Tabasco desde la última contingencia de 1999. El tamaño de la tragedia ha arrojado dudas sobre la correcta aplicación de los miles de millones de pesos que se canalizaron a nuestro estado durante el período de gobierno de Manuel Andrade para evitar tragedias como la que

entonces y ahora padecemos, así como del destino que tuvieron los más de 4 mil millones de pesos que por concepto de excedentes petroleros se destinaron a Tabasco en los últimos años.

Especialistas afirman que tal cantidad económica hubiese permitido avanzar significativamente, e incluso concluir, el Plan Hidráulico del Estado de Tabasco. Un reporte de la Secretaría de Administración y Finanzas local pareciera confirmar la toma de decisiones en ese sentido y un 50% de los excedentes petroleros que recibió el Gobierno del Estado fueron canalizados a dependencias responsables de las obras hidráulicas, pero ¿dónde están las obras que con ese dinero pudieron hacerse para evitar las crueles inundaciones de estos días?

La investigación que pedimos, además de despejar todas esas interrogantes, es sana para gobernantes y gobernados. Los primeros, tendrán la certeza de que sus acciones y las de quienes los precedieron han sido las adecuadas para brindar garantías mínimas de seguridad, protección, prevención, planificación, etc.; en caso contrario, estarán en posibilidades de señalar con veracidad a los responsables y de corregir el rumbo para cumplir con el único mandato para el que han sido electos: atender las demandas de la ciudadanía. A los segundos, que desde cualquier trinchera (la del ciudadano de a pie, la académica, la profesional, la empresarial, etc.) demandan siempre un gobierno de calidad, les dará la certidumbre y seguridad de no haber estado a merced de gobiernos ciegos, sordos y mudos, a sus verdaderas necesidades y prioridades.

La desgracia que hoy vive Tabasco exige que, si ha habido corrupción, irresponsabilidad o negligencia en esta tragedia, los presuntos responsables sean castigados con todo el rigor y peso de la ley.

Muchas gracias